par la negación de la competencia de la Tesorería para continuar la tramitación de las mismas. Por eso, al haber resuelto el órgano administrativo requerido mantener la jurisdicción de la Tesorería, el conflicto ha quedado trabado.

Argumenta a continuación, el Abogado del Estado, con invocación del artículo 8 de la LCJ, que en las actuaciones seguidas por la Tesorería se encuentra agotada la vía administrativa, por haber transcurrido desde la fecha de la adjudicación de los bienes embargados -7 de septiembre de 1989- un plazo superior a los quince días previstos para interponer reclamación económico-administrativa, plazo que excede de los ocho fijados en el artículo 187 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social -Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo- para acudir contra los actos de gestión recaudatoria ante el Tesorero territorial, por lo que siendo firme en vía administrativa la adjudicación de los bienes embargados no cabe promover conflicto de jurisdicción contra tal actuación.

Este alegato en puridad no afecta al planteamiento del conflicto, si se repara en que la jurisdicción controvertida no versa sobre la competencia de la Tesorería para efectuar la adjudicación de los bienes subastados, como el propio representante de la Administración reconoce, sino sobre la jurisdicción para decidir sobre el producto de la subasta -y hay que entender para conocer también de las actuaciones subsiguientes-, en definitiva, en la línea dialéctica del Abogado del Estado, sobre la competencia para la ejecución del acto de adjudicación, posibilidad abierta por el artículo 8, «in fine» de la LCJ.

Por último, tampoco puede acudirse en contra de la existencia del conflicto que so capa del mismo el Juzgado ha planteado de oficio una tercera de mejor derecho, pues lo que se discute es la preferencia que sobre los bienes embargados al deudor común corresponde a la Tesorería o a quienes fueron trabajadores de aquél, ya que cuando así se arguye se está sometiendo a crítica el fundamento del requerimiento judicial de inhibición, no la existencia del conflicto, que ha surgido de las recíprocas posiciones antagónicas del Juzgado y de la Administración requerida en orden a la competencia para seguir conociendo con carácter exclusivo de un procedimiento de apremio.

Cuarto.-Entrando, por tanto, a conocer del fondo del conflicto, no puede negarse, en principio, que tanto el Juzgado promovente como la Tesorería Territorial de la Seguridad Social tienen jurisdicción en sus respectivas esferas para conocer de los procedimientos de apremio seguidos por uno y otro órgano contra el deudor común. Ahora bien, al haberse trabado los respectivos embargos sobre unos mismos bienes y discutiéndose a quién corresponde decidir sobre el destino del producto de la subasta administrativa de los mismos, la jurisdicción controvertida debe discernirse según constante doctrina atendiendo, no al carácter de los créditos concurrentes y a su respectiva prelación, como sostienen aunque llegando a distintas conclusiones el Juzgado y el representante de la Administración, sino teniendo en cuenta las fechas en que se realizaron los embargos, para definir la jurisdicción en favor del órgano que primero trabó los bienes subastados (sentencias de este Tribunal de 9 de julio y 10 de noviembre de 1986), como señala el Ministerio Fiscal.

Por tanto, constando en las actuaciones que los embargos administrativos tuvieron lugar el 18 de abril y el 15 de noviembre de 1988 y que el embargo judicial se produjo el 12 de abril de 1989, pues aunque se acordó por primera vez el 9 de noviembre del año anterior el Juzgado decretó la nulidad de todas las actuaciones ejecutivas a partir del momento en que se embargaron las fincas sin limitación alguna de su propiedad en virtud de providencia de la expresada fecha -12 de abril de 1989-, según consta al folio 107 de las actuaciones judiciales, y que, por otro lado, la Tesorería Territorial de la Seguridad Social cuenta con dos anotaciones preventivas de tales embargos anteriores a la practicada con motivo del embargo judicial, hay que concluir que la jurisdicción controvertida corresponde a la citada Tesorería.

FALLAMOS

Declarar que la jurisdicción para seguir conociendo del procedimiento de apremio contra el deudor don Ramón Piquer Magdalena, respecto a la nuda propiedad de las fincas que se relacionan en el antecedente de hecho primero de esta resolución, corresponde exclusivamente a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Castellón, debiendo abstenerse el Juzgado de lo Social número 2 de dicha capital a continuar conociendo del procedimiento de ejecución que tramita respecto a dichos bienes.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará inmediatamente a los órganos contendientes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Signen las firmas.-Rubricado.

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Angel Rodríguez García, Ponente que ha sido en estos autos, hallándose celebrando audiencia pública el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.-Rubricado.

Concuerda literalmente con su original a que me remito y de que certifico. Y para que conste en cumplimiento de lo acordado, expido la presente para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que firmo en Madrid a 7 de enero de 1991.

1556

SENTENCIA de 19 de diciembre de 1990, recaída en el Conflicto de Jurisdicción número 1/1990, planteado entre la Audiencia Provincial de Vitoria y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Don Santiago Ortiz Navacerrada, Vicesecretario de Gobierno del Tribunal Supremo.

Certifico: Que en el Conflicto número 1/1990 bis, del que más abajo se hace mención, aparece dictada la siguiente sentencia:

Presidente: Excelentísimo señor don Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal Supremo.

Vocales:

Excelentísimos señores don Angel Rodríguez García, Magistrado del Tribunal Supremo; don Pedro Esteban Alamo, Magistrado del Tribunal Supremo; don Jerónimo Arozamena Sierra, Consejero Permanente de Estado; don Miguel Vizcaino Márquez, Consejero Permanente de Estado y don Landelino Lavilla Alsina, Consejero Permanente de Estado.

En Madrid a 19 de diciembre de 1990;

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por los excelentísimos señores indicados, el suscitado entre la Audiencia Provincial de Vitoria y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La Audiencia Provincial de Vitoria, conociendo de un recurso de queja en un procedimiento civil, resolvió por auto de 2 de junio de 1989 apercibir al Juez que rubricó, conformando una propuesta de providencia que resolvía no haber lugar a estimar la reposición de otra providencia anterior. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por acuerdo tomado en sesión celebrada el 4 de agosto siguiente, anuló la sanción de apercibimiento, dejando sin efecto cuantas medidas de cualquier naturaleza se hayan tomado en cumplimiento o a consecuencia de la resolución así reformada.

Segundo.-La Audiencia Provincial de Vitoria dictó auto de 4 de octubre del mismo año por el que dispuso mantener su propia competencia frente al acuerdo de la Sala de Gobierno de 4 de agosto anterior y remitir testimonio de dicha resolución a ésta, que por nuevo acuerdo, tomado el 22 de noviembre, resolvió mantener en su integridad el de 4 de agosto, que declaró la nulidad de la sanción de apercibimiento.

Tercero.-La Audiencia Provincial, por providencia de 30 de diciembre de 1989, apreciando la posible existencia de un conflicto positivo de competencia entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior y aquella, invocando el artículo 47.1 de la LOPJ, decidió elevar las actuaciones a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo.

Cuarto.-El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dictó el 29 de enero de 1990 providencia por la que, con los antecedentes remitidos por el Presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria, ordenó formar el correspondiente rollo, designar Ponente y, antes de prejuzgar sobre la competencia de este Tribunal, oír al Ministerio Fiscal, por término de diez días, convocándose a los componentes del mismo para el día 14 del actual, a las doce horas de su mañana.

Siendo Ponente el excelentísimo señor don Angel Rodríguez García, Magistrado del Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.-Las actuaciones recibidas arrancan, en lo que aquí interesa, de una resolución de la Audiencia Provincial de Vitoria, en la que, con ocasión de un recurso de queja deducido dentro de un procedimiento civil, se dispone apercibir al titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que denegó el previo recurso de reposición, por haber entendido la Sala que la providencia dictada por éste, en los términos que se han relatado en los antecedentes, vulnera los artículos 369 y 380 de la LEC y el principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE.

El conflicto ha surgido al estimar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el recurso de alzada interpuesto por el corregido, anulando la sanción de apercibimiento, con apoyo en que esta sanción, que figuraba en la lista del artículo 449 de la LEC, ha sido eliminada por el artículo 420.1 de la LOPJ, al que atribuye efectos derogatorios, por lo que, a su juicio, el acto sancionador vulnera el artículo 25.1 de la CE. Y el conflicto se ha planteado al mantener la Audiencia Provincial su propia competencia frente al acuerdo de la Sala de Gobierno, y ésta en su integridad el acuerdo anulatorio dictado.

Segundo.-El Ministerio Fiscal, en su informe, sostiene que la evidente imposibilidad de que pueda constituirse la Sala especial del artículo 42 de la LOPJ para resolver el conflicto -entiende que tampoco es de aplicación el artículo 52 de esta Ley- explica que este Tribunal haya asumido la competencia para resolverlo.

Tal conclusión no puede obtenerse de la providencia del pasado 29 de enero, ya que su lectura revela que nuestra hipotética competencia

quedó imprejuizada. Tampoco nos corresponde analizar la cuestión que suscita el Ministerio Fiscal, en relación con lo que establecen los artículos 42 y 52 de la LOPJ. Lo que sí podemos examinar es nuestra propia competencia, como ya quedó anunciado.

Tercero.-El artículo 1.º de la LCJ nos atribuye competencia para resolver los conflictos de jurisdicción que surjan entre los Juzgados y Tribunales y la Administración, en coherencia con lo que previene el artículo 38 de la LOPJ. El artículo 3.º, en relación con el 9.1 de la LCJ, relaciona los órganos que en las distintas esferas de la Administración, estatal, autonómica y local, pueden plantear conflictos a los Juzgados y Tribunales o ser requeridos de inhibición por éstos. Obviamente no contempla, en ninguno de sus apartados, a las Salas de Gobierno, por la sencilla razón de que, aunque desempeñen funciones gubernativas, o si quiere materialmente administrativas, en sus respectivos Tribunales, se encuentran dentro del Poder Judicial, tanto por su composición, exclusivamente judicial -artículo 149 de la LOPJ-, como por las competencias que tiene atribuidas -artículo 152 de la LOPJ-. Por otro lado, esta claro también que este Tribunal, por su composición paritaria y por su competencia definida con toda nitidez, sólo ésta llamado a resolver los conflictos de jurisdicción que puedan plantearse entre dos poderes del Estado, los Juzgados y Tribunales y la Administración, pero carece de competencia para conocer de las contiendas intrajudiciales, como la que aquí se plantea.

FALLAMOS

Declarar que este Tribunal carece de competencia para resolver el conflicto planteado entre la Audiencia Provincial de Vitoria y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará inmediatamente a los órganos contendientes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Siguen las firmas.-Rubricado.

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Angel Rodríguez García, Ponente que ha sido en estos autos, hallándose celebrando audiencia el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.-Rubricado.

Concuerda literalmente con su original, a que me remito y de que certifico. Y para que conste, en cumplimiento de lo acordado, expido la presente, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que firmo en Madrid a 7 de enero de 1991.

MINISTERIO DE JUSTICIA

1557 REAL DECRETO 25/1991, de 14 de enero, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Marqués de Rivas-Cacho a favor de doña María Teresa Cervantes y Riba.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacción dada por el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputación Permanente de la Grandeza de España y el Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de doña María Teresa Cervantes y Riba, para sí, sus hijos y sucesores, el título de Marqués de Rivas-Cacho, previo pago del impuesto correspondiente.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

1558 REAL DECRETO 26/1991, de 14 de enero, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la dignidad nobiliaria de Grande de España a favor de don Antonio de Lamoral, Príncipe de Ligne.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacción dada por el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputación Permanente de la Grandeza de España y el Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don Antonio de Lamoral, Príncipe de Ligne, para sí, sus hijos y sucesores, la dignidad de Grande de España, previo pago del impuesto correspondiente.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

1559 ORDEN de 14 de diciembre de 1990 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villalcázar de Sirga a favor de don Jaime de Churruca y Azlor de Aragón.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villalcázar de Sirga a favor de don Jaime de Churruca y Azlor de Aragón, por distribución de su madre, doña María de la Concepción Azlor de Aragón y Guillas.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 14 de diciembre de 1990.-Por delegación (Orden de 30 de mayo de 1990), el Subsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

1560 ORDEN de 21 de diciembre de 1990 sobre cambio de capitalidad del Registro de la Propiedad de Grazales a la localidad de Ubrique.

Ilmo. Sr.: Habiéndose instruido expediente a instancia del señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ubrique, sobre el cambio de capitalidad del Registro de la Propiedad de Grazales a la localidad de Ubrique, fundamentando su pretensión en que la población de dicho término triplica a la de todos los demás términos municipales del distrito hipotecario, y que la mayoría de las inscripciones que se practican en el Registro de la Propiedad de Grazales corresponden a fincas del término de Ubrique, y formulándose informes razonados en sentido favorable del Notario de Ubrique, del Alcalde de Benaocaz, del Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera, así como de la Dirección General de Administración Local y Justicia de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, y emitido dictamen por el Consejo de Estado en el sentido de que procede el cambio de capitalidad de referencia, y otros en sentido desfavorable del Registrador de Grazales, de los Alcaldes de Grazales, Villaluenga del Rosario y El Bosque, y del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles;

Teniendo en cuenta:

Primero.-Lo dispuesto en los artículos 275 de la Ley Hipotecaria y 1, 482 y 483 de su Reglamento.

Segundo.-Que se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 483 en relación con el 482, ambos del Reglamento Hipotecario, y parece -como se deduce de lo actuado- que conviene al servicio público realizar el cambio de capitalidad propuesto.

Tercero.-Que aunque figuran en el expediente informes desfavorables a la modificación de que se trata, los expedientes de cambio de capitalidad deben resolverse teniendo en cuenta los intereses del público al que está abierta la institución registral, y en el presente caso la mayoría de los usuarios del Registro residen en el municipio de Ubrique.

Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, que el distrito hipotecario de Grazales pase a tener su capitalidad en Ubrique con esta denominación.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 21 de diciembre de 1990.

MUGICA HERZOG

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

1561 ORDEN de 21 de junio de 1990 por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada en 22 de septiembre de 1989, del Tribunal Supremo, contra la sentencia dictada en 10 de octubre de 1986 por la Audiencia Nacional.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 22 de septiembre de 1989 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administrativo en grado de apelación, interpuesto por la Entidad «Constructora Bernal, Sociedad Anónima», contra la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 1986 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia